

PROCESOS POLÍTICOS Y COMUNICACIONALES EN LATINOAMÉRICA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

POLITICAL AND COMMUNICATIONAL PROCESS IN LATIN AMERICAN IN THE LAST FIFTY YEARS

Mg. Maria Soledad Segura
Universidad de Buenos Aires
sole_segura@yahoo.com.ar
Argentina

Resumen

Procuraré mostrar aquí las relaciones entre las disputas en torno a las políticas comunicacionales dadas por universidades, gobiernos y movimientos sociales, y los procesos políticos generales -y las teorías políticas que los sustentaban- desarrollados durante el último medio siglo en Latinoamérica. La hipótesis de la que parto es que las políticas comunicacionales –igual que otras políticas específicas- se definieron al calor de las luchas sociales, por lo que los debates sobre teorías y políticas de comunicación son –o deberían ser- inseparables de las consideraciones sobre las transformaciones políticas.

Palabras claves: Políticas Comunicacionales, América Latina, Desarrollo, Democracia.

Abstract

I will try to show the relationship between the dispute about communication policies among universities, governments and social movements, and the political processes -and their implicit political theories- developed during the past half century in Latin America. The hypothesis is that the communicational policy -like other specific policies- is defined by social struggles, so discussions about theories and communication policies are -or should be- indivisible from considerations on political transformations.

Key words: Communication Policies, Latin America, Development, Democracy.

(Recibido el 01/11/07)
(Aceptado el 11/02/08)

Introducción

En la investigación que desarrollo en vistas a la obtención del Doctorado en Ciencias Sociales, analizo las prácticas de las organizaciones (universidades, gremios, ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil) que proponen democratizar las comunicaciones en la Argentina después de 2001. Estas propuestas renuevan la discusión sobre la relación comunicación y política, a partir de la relación comunicación, ciudadanía y democracia. Esta discusión se tornó central en los últimos años en el campo comunicacional en Latinoamérica, tanto en eventos científicos y académicos del área (Mata y otros, 2005), como en la intervención de numerosas organizaciones sociales (Mattelart en Mata y otros, 2005).

En este artículo procuraré mostrar las relaciones entre las disputas en torno a las políticas comunicacionales dadas por universidades, gobiernos y movimientos sociales, y los procesos políticos generales -y las teorías políticas que los sustentaban- desarrollados durante el último medio siglo en Latinoamérica. La hipótesis de la que parto es que las políticas comunicacionales –igual que otras políticas específicas- se definieron al calor de las luchas sociales, por lo que los debates sobre teorías y políticas de comunicación son –o deberían ser- inseparables de las consideraciones sobre las transformaciones políticas.

Cabe aclarar que no intento realizar aquí un análisis exhaustivo de estos procesos políticos, sino sólo establecer conexiones con las disputas por la formulación de políticas comunicacionales y definir algunas hipótesis y algunos argumentos que las sustenten, con la pretensión de profundizar este trabajo en la tesis doctoral.

En primer lugar, pretendo demostrar aquí que, la práctica (en tanto “*teoría de la acción en acción*” –Costa, 1997-) de la comunicación en Latinoamérica, se fue modificando a medida que cambiaba:

1. La teoría de explicación de las prácticas sociales y su perspectiva sobre el sujeto de su intervención (clase media, sector popular esencialmente opositor, sujeto popular contradictorio, ciudadano);
2. La teoría del cambio de las prácticas sociales (lucha de clases, construcción de hegemonía, democracia radical) y su noción de desarrollo.

En segundo lugar, procuro demostrar que la definición de las políticas comunicacionales del Estado fueron objeto de lucha entre agentes sociales provenientes de las corporaciones privadas de los medios de comunicación de masas, los funcionarios políticos de gobierno, las iglesias –particularmente la católica-, los investigadores y docentes de comunicación, los gremios de prensa, las ONGs que trabajaban en comunicación popular, etc. Y que en esa disputa por la imposición del modo correcto de organizar el sistema comunicacional en Latinoamérica, los beneficiados fueron siempre y cada vez más las grandes corporaciones mediáticas, aún cuando los movimientos sociales hayan ido logrando pequeñas reivindicaciones colaterales que no hacen al control de los medios de producción.

El Desarrollo: ¿modernización o dependencia? ¿Comunicación para el desarrollo o comunicación popular?

El desarrollo a imagen y semejanza

Después de la segunda guerra mundial, en el marco de la guerra fría, las economías capitalistas crecieron, incluso las de Latinoamérica. Este crecimiento se mantuvo por 30 años, hasta la década de los 70 cuando se clausuró esta “época de oro” del capitalismo. Además, en el marco de la bipolaridad, los movimientos sociales obtuvieron grandes conquistas sociales que se tradujeron en las políticas de los Estados de Bienestar.

En la década de los 50, algunos investigadores comenzaron a pensar que el capitalismo podía extenderse indefinidamente, que era viable y que los factores políticos y sociales debían subordinarse al desarrollo económico. De acuerdo con el paradigma de la

sociología estructural- funcionalista, suponían que todas las economías se integraban de igual manera al sistema mundial y que los países subdesarrollados debían superar los “obstáculos estructurales” que los alejaban del único patrón de desarrollo: el de los países centrales, para lo cual debían superar los resabios de la sociedad tradicional, para dar paso a la sociedad moderna. En Latinoamérica, los investigadores de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) –órgano regional de Naciones Unidas creado en 1948 con el objetivo de “contribuir al desarrollo económico” de la región-impulsaron lo que se conoció como teoría del desarrollo.

Desde esta perspectiva, era necesario que la periferia impulsara su propio desarrollo, para lo cual debía industrializarse. Esto debía ir estrechamente ligado al progreso técnico de la agricultura para evitar el deterioro relativo de sus precios. Así se desarrolló el concepto de “desarrollo hacia adentro” por sustitución de importaciones. La CEPAL sostuvo que en este proceso debía intervenir el Estado en la planificación del desarrollo tanto para elevar el ritmo de acumulación del capital como para prevenir sus consecuencias. Este rol modernizador conferido al sector público se tradujo en la creación de agencias estatales de investigación y difusión técnica. El sujeto de la transformación serían los sectores medios.

Esta idea del desarrollo como un avance a la prosperidad y el bienestar, previsto y organizado racionalmente por medio de la intervención estatal activa con apoyo de la tecnología, requería provocar cambios de conducta y costumbres por persuasión educativa tanto en funcionarios como en beneficiarios.

Esto es lo que llegaría a constituir lo que luego se conoció como comunicación para el desarrollo. En este campo, inicialmente -desde fines de los 40 y hasta inicios de los 50-, se realizaron experiencias prácticas como las de las radio escuelas promovidas por la Iglesia Católica en la aldea andina de Sutatenza, en Colombia, y las radios mineras de Bolivia mantenidas por los sindicatos que transmitían incluso desde los socavones en español y quechua. Por otra parte, en la misma época, los servicios públicos de agricultura, educación y salud copatrocinados por los gobiernos de EEUU y de la región, tenían sus propios órganos de comunicación dedicados a la “extensión agrícola”, la “educación sanitaria” y la “educación audiovisual” respectivamente.

La teorización se inició aproximadamente diez años después. Desde fines de los años 50 sociólogos y comunicólogos estadounidenses publicaron estudios referidos a la necesidad de extinción de la “sociedad tradicional” para dar paso a la “modernización” (Lerner, 1958 citado por Beltrán Salmón, 2005), a métodos de “difusión de innovaciones” como motor de la modernización social (Rogers, 1962 citado por Beltrán Salmón, 2005), la necesidad de creación de un “clima para el cambio” (Schramm, 1964 citado por Beltrán Salmón, 2005). Estas teorías sostenían que los medios de comunicación debían ser usados como instrumental de apoyo en las instituciones que ejecutan proyectos de desarrollo y que, gracias a su influencia, la comunicación de desarrollo es la creación de “una atmósfera pública favorable al cambio que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales” (Beltrán, 2005). Entre los desarrollos teóricos sobre la comunicación de masas y la opinión pública, hay algunos determinados a tal punto por el contexto internacional de la guerra fría que reflexionan operativamente sobre el equilibrio de poder, la seguridad colectiva y el gobierno mundial.

“La presión de la peritación es tan fuerte que Ithiel de Sola Spool, profesor en el *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), no duda en dedicarse plenamente, a petición del Pentágono, a la formulación de un modelo (*Agile Coin*) que alimente las estrategias contrainsurreccionales (*Coin* es la contracción de *Counterinsurgency*) en el sudeste de Asia y en América Latina” (Mattelart, 1997: 45).

La práctica de la comunicación para el desarrollo que aplicó los formatos operativos propuestos por estos teóricos estadounidenses se consolidó durante los años 50 y 60 con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Holanda, y de organismos multilaterales de la Organización de Naciones Unidas (como la FAO, UNESCO, OPS, UNICEF, PNUD) y de la Organización de Estados Americanos.

“La propia aproximación difusionista a los problemas de la comunicación asociada con las estrategias de desarrollo y modernización en el Tercer Mundo es inexplicable sin el trasfondo de esta discrepancia maniquea dictada por el imperativo de la ‘seguridad nacional’ (visión del espacio internacional como lugar de enfrentamiento entre dos bloques, entre dos ideologías). Eso explica por qué el análisis funcional confía en la doctrina del departamento de Estado sobre el *free flow of information* calcado del principio intangible de la libertad de circulación de las mercancías, asimilando pura y simplemente la libertad de expresión comercial de los actores privados del mercado a la libertad de expresión sin más” (Mattelart, 1997: 79).

La dependencia buscada

En los años 60 comienza a hacerse evidente que las economías de los países latinoamericanos no podían dar ese “gran salto” hacia una economía industrial. La dependencia comercial y financiera de las economías de la región de los países centrales y la vulnerabilidad financiera de sus Estados, se hacen evidentes. Además, luego de dos décadas de industrialización, importantes grupos sociales quedaban excluidos.

A la tensión Este- Oeste, principal controversia luego de la Segunda Guerra Mundial, en las décadas de los 50 y 60, a partir de los procesos de liberación e independencia de las antiguas colonias, se sumó un nuevo eje de tensión: Norte- Sur. Las nuevas naciones independientes, si bien se encontraban afectadas por el conflicto entre los bloques de la Guerra Fría, reconocieron que sus intereses se encontraban por fuera de esa disputa y comenzaron a cuestionar la distribución de la riqueza a nivel mundial. Los gobiernos del que comenzaba a ser llamado Tercer Mundo, se organizaron en el Movimiento de los Países no Alineados y sus votos comenzaron a tener un valor estratégico en las Naciones Unidas. Sin embargo, no pudieron eludir la disputa entre el bloque soviético y los países occidentales.

El desarrollismo ignoraba que las economías nacionales se insertaban en el sistema mundial en una estructura jerárquica. Prebisch reconoció que no supieron presentar “una opción eficaz a la ortodoxia” ya que no se ocuparon de la estructura social y la distribución del ingreso. “Quedaba acaso un resabio neoclásico: el mismo vigor del desarrollo traería espontáneamente la equidad distributiva con el andar del tiempo. (...) En aquellos años prevalecía en mí el extraviado concepto de una teoría esencialmente económica del desarrollo” (Prebisch, 1981).

“Se está desvaneciendo el mito de que podríamos desarrollarnos a imagen y semejanza de los centros. Y también el mito de la expansión espontánea del capitalismo en la órbita planetaria. El capitalismo desarrollado es esencialmente centrípeto, absorbente y dominante. Se expande para aprovechar la periferia. Pero no para desarrollarla. Muy sería contradicción en el sistema mundial. Y muy sería también en el desarrollo interno de la periferia. Contradicción entre el proceso económico y el proceso democrático. Porque el primero tiende a circunscribir los frutos del desarrollo a un ámbito limitado de la sociedad. En tanto que la democratización tiende a difundirlos socialmente. Y esta contradicción, esta tendencia conflictiva del sistema, tiende fatalmente a la crisis, al desenlace inflacionario con graves consecuencias de todo orden” (Prebisch, 1981).

En la década de 1960, economistas y científicos sociales latinoamericanos impugnaron las teorías desarrollistas y realizaron –desde un paradigma económico estructuralista-rigurosos análisis de los procesos históricos de constitución de las estructuras económicas de

la periferia en el orden capitalista internacional en el marco del dominio neocolonial y la división internacional del trabajo. A partir de estos estudios, sostuvieron que los países dependientes debían formular políticas de consolidación de los mercados internos y protección de los trabajadores. Estas críticas y propuestas conocidas como teoría de la dependencia, mostraban variantes que dependían de la apreciación del margen de maniobra y el nivel de autonomía de cada nación en relación con las determinaciones del sistema mundo. El beneficiario del desarrollo cuyas pautas de conducta había que cambiar se convierte en sujeto de un desarrollo diseñado desde el propio Tercer Mundo, y aparece un nuevo sujeto de cambio: la clase trabajadora. En sus análisis de la oposición centro- periferia, la teoría de la dependencia se distanciaba no sólo de la teoría del desarrollo sino también del marxismo clásico que concebía “de manera general e indeterminada” que “el proceso de desarrollo capitalista se da en provecho de la burguesía y de que en las condiciones de América Latina y del desarrollo de capitalismo internacional, ella es una expresión del imperialismo” (Cardoso, 1994).

“La crítica se hace mostrando que el desarrollo que ocurre es capitalista y que no se puede desligar del proceso de expansión del sistema capitalista internacional y de las condiciones políticas en que se opera. Por otro lado, la crítica se orienta a mostrar (...) que el ‘análisis estructural’ de los procesos de formación del sistema capitalista solo tiene sentido cuando son referidos históricamente” (Cardoso, 1994).

Cardoso insiste en que la noción de dependencia permite explicar los procesos sociales, políticos y económicos “a partir de las situaciones concretas y particulares las cuales se dan en las situaciones de dependencia” (Cardoso, 1994). Se parte de considerar que “los cambios ocurridos en el ‘centro’ son concomitantes y encuentran expresión concreta en otros tantos cambios de la periferia”, pero se acepta que “existe una ‘historia’ –y por tanto, una dinámica- propia de cada situación de dependencia” (Cardoso, 1994). Los análisis de la dependencia implicaron una visión del desarrollo desde la perspectiva del Tercer Mundo. Cardoso sostiene que “no existe una teoría de la dependencia independientemente de la teoría del imperialismo” ya que las situaciones de dependencia provienen de la existencia de algún tipo de expansión del capitalismo. En respuesta a Weffort quien sostenía que el avance teórico sobre la cuestión del problema nacional en el cuadro de las relaciones de clase pasa por la crítica a la propia noción de dependencia (1970), Cardoso sostiene:

“Precisamente, lo que se pretendía mostrar concretamente, o sea, sin recurrir a las contradicciones generales e indeterminadas de las ideas abstractas de clase, nación, Estado o imperialismo, que la contradicción entre las clases, en los países dependientes pasa por una contradicción nacional y se implica en el contexto más general de una contradicción de clases en el plano internacional y en las contradicciones que derivan de la existencia de Estados Nacionales” (Cardoso, 1994).

En la investigación en comunicación, algunos estadounidenses hicieron una autocrítica y pronosticaron “la extinción del paradigma dominante” (Rogers, 1974 citado por Beltrán, 2005), y Schiller inaugura una perspectiva crítica estadounidense sobre la cuestión de la dependencia cultural al definir el concepto de “imperialismo cultural” (Schiller, 1976 citado por Beltrán, 2005). Esto se sumó a los múltiples cuestionamientos al modelo clásico de comunicación realizados por teóricos latinoamericanos. En América Latina, una generación de investigadores críticos inicia en los años 60 una ruptura con la sociología funcionalista de los EEUU.

“América Latina no es sólo un lugar de una crítica radical de las teorías de la modernización aplicadas a la difusión de innovaciones en relación con los campesinos en el marco de las tímidas reformas agrarias, a la política de planificación familiar o a la enseñanza a distancia, sino que produce también iniciativas que rompen con el modo vertical de transmisión de los ideales del desarrollo” (Mattelart, 1997: 81).

El precursor de estas críticas fue en 1963 el venezolano Antonio Pasquali y luego, en 1969, el brasileño entonces exiliado en Chile, Paulo Freire. “Así se fue constituyendo el núcleo generador de la propuesta para la democratización de la comunicación”, sostiene Beltrán y Mattelart destaca cómo investigadores paraguayos, brasileños y argentinos rápidamente se distinguieron por su reflexión sobre el vínculo entre comunicación y organización popular. Esta perspectiva rompió tanto con las tesis sobre la historia del capitalismo moderno del marxismo, como con el esquema Este/ Oeste de la guerra fría que había marcado la sociología estadounidense de la comunicación. Mattelart (quien entonces vivía y producía en Chile) sostiene que América Latina fue a la vanguardia de este tipo de estudios porque aquí vacilaron las viejas concepciones sobre agitación y propaganda desarrolladas en Europa y Estados Unidos durante y después de la guerra, porque en esta región el desarrollo de los medios de comunicación era entonces bastante más importante que en las demás regiones del tercer mundo.

La economía política de la comunicación comienza a desarrollarse en los años 60. “Primero adopta la forma de una reflexión sobre el desequilibrio de los flujos de información y de productos culturales entre los países situados a uno y otro lado de la línea de demarcación del ‘desarrollo’” (Mattelart, 1997: 77). En tanto, a partir de 1975, en un momento en el que las políticas gubernamentales de democratización cultural y la idea de servicio y monopolio públicos deben afrontar un mercado en vías de internacionalización, se comienza a reflexionar no ya sobre la industria cultural, sino sobre las industrias culturales: “Se trata de entrar en la complejidad de estas diversas industrias para intentar comprender el proceso creciente de valoración de las actividades culturales por el capital” (Mattelart, 1997: 77).

En esa época, se desarrollaron prácticas de comunicación alternativa en muchos países de la región: las escuelas radiofónicas y reporteros populares de comunidades campesinas en Bolivia promovidas por la iglesia católica; cooperativas de agricultores en Uruguay; campesinos en Ecuador; enseñanza por televisión en El Salvador y México; periodistas con la prensa *nanica* (en miniatura) en Brasil; y otras más en Perú. “Festivales de música y de bailes, ferias, pancartas, teatro callejero, concursos y funciones de títeres fueron otros de los procedimientos empleados en varios países de la región para decir lo que los grandes medios no decían”, recuerda Beltrán (2005). En estas prácticas pioneras de la comunicación alternativa, el sujeto popular era identificado con los campesinos e indígenas y considerado esencialmente opositor a las clases dominantes. Se consideraba que la comunicación debía contribuir a la “concientización” de las clases subalternas para impulsar el cambio social que conduciría a su “emancipación” o “liberación”. Estas prácticas fueron duramente reprimidas durante las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980.

En los años 70, los comunicadores latinoamericanos constituyen agrupaciones profesionales como la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas (ALER), la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (ALAIIC) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), además de institutos y centros de países como México, Perú y Chile que se destacaron por sus contribuciones a “la democratización de la comunicación y del desarrollo”.

En esa época de altísima productividad teórica y práctica, los gobiernos que formaban parte del Movimiento de Países No Alineados, con liderazgo principalmente yugoslavo y árabe, proclamaron, en la IV Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de los Países no Alineados en Argel en 1973, la necesidad de un Nuevo Orden Internacional de la Información (NOMIC) – en el que disputaban el control de las comunicaciones en tanto recurso estratégico en el marco de una confrontación como la de la Guerra Fría donde la disputa central, al no llegar a utilizar las armas, era cultural, ideológica e informativa-. Los No Alineados reclamaban un flujo de información no sólo “libre” –como propiciaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos- sino también “equilibrado” (Mastrini y de Charras, 2005), la reafirmación de la identidad nacional y el fin de las secuelas coloniales de dependencia cultural. Además, surgieron algunos intentos de cooperación Sur- Sur. Este fue un debate restringido a los Estados nacionales y, en menor medida, a los sectores con capacidad de lobby como los empresarios y los académicos, pero no incluyó a actores de la sociedad civil. De todos modos, como apuntan Mastrini y de Charras, “fue un debate que involucró a nuevos actores, que superaban el histórico reparto del

mundo entre los países centrales” al involucrar a los países del Tercer Mundo (Mastrini y de Charras, 2005).

Estas propuestas provocaron el áspero rechazo de los países desarrollados. La discusión sobre los desequilibrios de información se desarrolla paralela a la del reparto más justo de la riqueza. Al año siguiente, los países del Tercer Mundo presentarán en la Asamblea General de ONU, la necesidad de un Nuevo Orden Económico Mundial. Al mismo tiempo, se exigieron y se produjeron reuniones intergubernamentales para implementar Políticas Nacionales de Comunicación más democrática, bajo el supuesto de que nada servía democratizar las relaciones internacionales en materia de comunicación, si al interior de los países desarrollados se mantenían situaciones inequitativas.

Este debate sobre los desequilibrios de los flujos y los intercambios alcanza a la comunidad internacional y se expresa principalmente en la UNESCO a partir de 1969. El debate sobre la “comunicación en sentido único” que caracteriza las relaciones norte- sur desemboca en la creación de una comisión internacional para el estudio de los problemas de comunicación, cuyo informe (conocido con el nombre de su presidente, el irlandés Sean MacBride) es aprobado en la Asamblea General de la UNESCO en Belgrado en 1980. “Se trata del primer documento oficial emitido bajo los auspicios de un organismo representativo de la comunidad internacional que reconoce y expone claramente la cuestión del desequilibrio de los flujos y que reflexiona sobre las estrategias que han de ser puestas en marcha para ponerle remedio” (Mattelart, 1997: 82). El informe constituyó “un aporte importante para legitimar la noción de derecho a la comunicación, superador del ya obsoleto concepto de libertad de prensa, y mucho más abarcador que el de derecho a la información” (Mastrini y de Charras, 2005).

A principios de la década de 1970, el fracaso del modelo de desarrollo central se hizo impuso: la crisis del petróleo tuvo consecuencias graves en la economía latinoamericana. Era el fin de una época. Sin embargo, los gobernantes de la región parecieron no notar la extinción del modelo. Cuando los países necesitaron rearticularse, sobrevinieron convulsiones sociales y políticas. Los golpes de Estado militares concretaron y consolidaron la división del trabajo preexistente por medio del librecambio y la liquidación de la base industrial. Las economías se reprimarizaron. Se consolidó así un “subdesarrollo antidemocrático” (O'Donnell, 1988). Las economías latinoamericanas perdían capacidad de funcionamiento autónomo: eran dirigidas por sus líderes nacionales, pero no podían tomar decisiones sin consultar actores de fuera de la región, particularmente de los EEUU.

Avatares del Estado Social: democratización y reformas orientadas al mercado. La soberanía del receptor y la democracia de las redes.

La transición no pactada

A fines de los 70 y principios de los 80, durante los procesos de salida de las dictaduras, se desarrollaron en Latinoamérica estudios que se conocerían como teoría de la transición. Este paradigma ya no era sociológico como el desarrollista ni económico como el de la dependencia, sino politológico y considera que en el “cambio de régimen”, los problemas a resolver eran “la participación ciudadana, la mediación política y el sistema de partidos” (García Delgado, 2001: 36). La oposición pasa a ser autoritarismo- democracia y se preguntan por la vigencia del Estado de Derecho como sistema político democrático liberal. Este enfoque institucional de la discusión sobre la democracia se preocupaba por la manera de lograr la coincidencia entre cultura política e instituciones liberales.

“La hipótesis profunda que sustentó la teoría de la transición y que le transmitió un sesgo conservador fue la de una ingobernabilidad por exceso de demanda, alimentada por una cultura movimientista. Estaba la sospecha de que los sujetos populares promovían una excesiva presión sobre el sistema político generando la crisis del sistema. La gobernabilidad de la

democracia dependería, en consecuencia, del modo en que se hiciese esta transición, de los pactos y equilibrios de fuerzas que se lograsen para disminuir esta presión desde abajo. Desaparecerían, de esta manera, otros condicionamientos para la explicación de los golpes, como los provenientes del poder económico o las orientaciones de las potencias hegemónicas. Las causas del autoritarismo eran fundamentalmente endógenas y cultural- institucionales, disolviéndose la relación del Estado con intereses económicos, nacionales e internacionales y produciéndose un corte con la problemática del poder tanto interno como externo” (García Delgado, 2001).

En este sentido, O'Donnell observaba que en América Latina se registraba “una fúnebre colección de diversos tipos de gobiernos autoritarios” y que en el largo plazo, las variaciones de régimen “no parecen haber tenido ningún efecto significativo en las grandes y crecientes desigualdades que caracterizan las economías y sociedades en América Latina” (O'Donnell, 1988). Sin embargo, cifraba sus esperanzas en que la democracia se consolide en la región, en un cambio en el “clima ideológico” ya que “en gran medida como consecuencia del penoso aprendizaje inducido por los fracasos de esos regímenes y por su represión y violencia sin precedentes, la mayoría de las fuerzas políticas y culturales de algún peso atribuyen ahora un alto valor intrínseco al logro y consolidación de la democracia política” (O'Donnell, 1988). Sostenía que no había que subestimar el surgimiento de ideas, discursos y símbolos “orientados hacia la democracia”, ya que hasta hacía poco tiempo los discursos prevalecientes –si bien divergían tajantemente en muchos aspectos- coincidían en una visión profundamente autoritaria de la vida política y social. El padecimiento de gobiernos autoritarios “inusualmente represivos y socialmente regresivos” y de una inusualmente profunda crisis de las economías de la región, sumado al nuevo “prestigio ideológico de la democracia política”, provee una oportunidad sin precedentes, pero, al mismo tiempo (y paradójicamente), estos factores conducen a la emergencia de democracias frágiles.

“Desalentada por el fracaso en la lucha por las políticas de comunicación y por un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, la combatividad intelectual latinoamericana por la democratización de la comunicación vio algo menguado su brío en el primer tercio de la década del 80” (Beltrán, 2005), aunque muchos autores destacados de los 70 continuaron con su producción intelectual. Sí se hicieron algunas valiosas compilaciones de bibliografía regional. Y a mediados de la década, el comunicólogo español radicado en Colombia J. Martín Barbero introdujo una renovación conceptual al plantear la comunicación como un fenómeno de mediaciones culturales más que de medios. Se procura superar así la visión bipolar de la política mundial y de las clases sociales, para abordar los procesos de mediación y los mediadores, y con ellos, todo lo que hace complejo el enfrentamiento, el “choque cultural”. Este planteo, junto con los aportes del argentino radicado en México, N. García Canclini sobre las relaciones entre lo popular y lo masivo en las modernidades periféricas, contribuyó a que lo popular deje de ser asimilado exclusivamente a lo campesino e indígena, y considerado un sujeto esencialmente opositor que lideraría el proyecto emancipador, y a que se pasara a abordar su complejidad cultural y contradicciones políticas, en relación al mestizaje, lo urbano y lo masivo.

En 1985, el gobierno de los Estados Unidos, invocando una “politización” de los problemas de comunicación en el debate sobre el NOMIC, se retira de la UNESCO y luego lo sigue el de Inglaterra. La oposición intransigente del gobierno de Ronald Reagan y los conflictos de intereses entre los No Alineados -ya que los países del sur luchaban por su emancipación cultural nacional, los del bloque comunista se oponían a la apertura de sus propios sistemas de comunicación de masas, mientras otros utilizaban estos debates para legitimar sus propias carencias- contribuyeron al fracaso las propuestas del informe MacBride. Además, ya a partir de inicios de la década del 80 se había producido un cambio sustantivo del contexto político. “Efectivamente, no puede considerarse la derrota de los planteos de MacBride desligada de la derrota del movimiento político que las impulsaba”, sostienen Mastrini y de Charras (2005).

Neoliberalismo y repliegue

En la década del 80, la apertura y desmembramiento de la URSS y la caída del muro de Berlín configuran los hitos de un nuevo escenario geopolítico mundial donde Estados Unidos se consolida como potencia mundial única. Se multiplican los discursos sobre el fracaso del comunismo y el triunfo del capitalismo, primer modo de producción que se universaliza. Estos sucesos sumados al auge de *internet*, instauran la estrategia del “ensanchamiento pacífico a través de la integración de cada vez más países a la *global democratic marketplace*” (Mattelart en Mata y otros, 2005).

En la década del 80 se consolida el enfoque neoliberal de la economía. La meta a alcanzar es la estabilidad macroeconómica y para eso, se considera necesario encarar una drástica separación entre Estado y sociedad civil, y proceder al achicamiento del Estado para liberar el mercado y las supuestas tendencias autorreguladoras de la sociedad civil. Las políticas impulsadas por el llamado “Consenso de Washington” suponían que la crisis de la región tenía dos premisas que había que modificar: el exceso de estatismo y el exceso de populismo (excesivo poder en manos de sindicatos y organizaciones de trabajadores). Prebisch hace notar cómo la ortodoxia económica que se había impuesto en la periferia latinoamericana hasta 1930 siguiendo las consignas de la división internacional del trabajo en el libre juego de la economía internacional, el Estado prescindente y el patrón oro, en una concepción del “desarrollo hacia fuera”, demostró ser incompatible con las exigencias del desarrollo periférico; y que el tipo de desarrollo que lo sustituyó luego de la gran depresión mundial, demostró graves fallas económicas y sociales: concentración del ingreso, exclusión social e incremento de la conflictividad.

“Se imponía pues la búsqueda de nuevas formas de desarrollo. Pero he aquí que en vez de ello (...) se retorna a la ortodoxia pretérita. No se trata de una simple reacción a intervenciones del Estado, varias de ellas contraproducentes, sino de un cambio fundamental en la concepción del desarrollo. El desarrollo tiene que ser una consecuencia espontánea de las fuerzas del mercado tanto en el plano internacional como en el interno y el Estado ha de abstenerse de toda ingerencia como no sea asegurar el juego de la libre competencia” (Prebisch, 1982).

De acuerdo al principio del Estado prescindente, se desbarata la protección a la industria y los subsidios a la exportación de manufacturas y se impone el regreso al esquema de la división internacional del trabajo bajo el lema del aperturismo económico. Pero el éxito de esta política no sólo depende de la eficiencia de la actividad productiva de la periferia sino también del grado de receptividad de los centros. Esta particular visión del mercado internacional –en contradicción con la realidad- conlleva un considerable costo económico y social pero se argumenta que el sacrificio será transitorio, como sostenía el ex presidente argentino Carlos Menem: “Estamos mal, pero vamos bien”.

Las privatizaciones de las empresas que habían sido potestad del Estado incluyeron a las telecomunicaciones y los medios masivos de comunicación, y se permitió además el ingreso de empresas transnacionales, tanto en Europa como en Latinoamérica. El poder del sector financiero aumentó a partir de la desregulación del sistema y de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

En el campo de las teorías de la comunicación, en consonancia con el libremercado imperante, se desarrollaron teorías de la recepción que ponían el acento en la libertad del receptor/ consumidor/ usuario de hacer uso de los productos culturales, particularmente de los mensajes de los medios, y resignificarlos. “Las concepciones monolíticas del espectador, de la audiencia o de la propia televisión están aquí desplazadas (...) por el nuevo énfasis puesto en la diferencia y las variaciones (...) debidas a los factores que elaboran los contextos sociales de la recepción” (Hall, 1986 citado por Mattelart, 1997: 100). El interés por analizar las lecturas y usos diferenciados se realiza en un contexto particular en el que “la recepción y el individuo-consumidor ocupan un papel central en la concepción neoliberal de la sociedad” (Mattelart, 1997: 103). No se trata de cualquier consumidor sino de alguien considerado “soberano en sus

elecciones” en un mercado libre. “De ahí las derivas neopopulistas de algunas teorías de la recepción”, apunta Mattelart (1997: 103). Algunos estudios sobre las interpretaciones y resignificaciones diversas que realizan los receptores a partir de sus diferentes culturas y contextos, contribuyeron a borrar la cuestión del poder de la comunicación y a invalidar la cuestión de las determinaciones sociales y económicas del consumo individual como de la producción y consumo cultural nacional en un momento en que la hegemonía de los Estados Unidos en la producción audiovisual está en el centro de los debates en organismos internacionales.

“Llegan con sordina a la siguiente conclusión: como el poder de los emisores es muy relativo, contrariamente a lo que pudiera creerse, la idea de un emisor más poderoso que otro, al igual que la necesidad de una economía política establecida bajo un signo crítico, pierden en gran parte su pertinencia. En efecto, ¿de qué sirve apenarse sobre el intercambio desigual de los programas de televisión o las películas en el mercado internacional de lo audiovisual si el poder del sentido está en manos del consumidor?” (Mattelart, 1997: 103).

El desarrollo tecnológico de las redes informáticas y la digitalización de señales permitieron el almacenamiento, transmisión y manejo de grandes paquetes de información. Esto incidió en una transformación del medio televisivo y de las telecomunicaciones. “Se modificaba sustancialmente la base tecnológica sobre la cual se asentaba el servicio al tiempo que mutaba la estructura de propiedad” (Mastrini y de Charras, 2005). A mediados de los 90, la apertura y comercialización de las redes informáticas y la web permite el crecimiento desmesurado de la red y comienzan a registrarse grandes ganancias en las empresas del rubro. En 1999 la red obtiene los mayores índices de capitalización bursátil en medio de una burbuja especulativa que caerá en marzo de 2000. “Evidentemente, la tecnología no constituía por sí misma una garantía de crecimiento económico, así como el desarrollo de la, en términos de Castells, Sociedad Informacional, no reducía las desigualdades en términos de acceso a la información” (Mastrini y de Charras, 2005).

Desde mediados de la década del 70 se venía configurando un imaginario tecnicista, que se consolida en los 80 y se expande en los 90. Estos planteos futuristas ven en la tecnología –y en su capacidad para almacenar, manipular y transmitir información y conocimiento- una solución para la crisis económica del capitalismo postfordista y para la democratización de la sociedad. El fetichismo tecnológico de esta época “nace con la electrónica, pasa a la informática, para finalmente anclarse en ‘las redes’ y la biotecnología” (Mastrini y de Charras, 2005). En 1995 M. Castells desarrolla una de las sistematizaciones teóricas más rigurosas sobre la tensión entre tecnología y sociedad en sus libros *La era de la información* donde desarrolla el concepto de “modo de desarrollo informacional”. Con sus análisis se sedimentan las teorías proféticas que centraban en la tecnología todas las expectativas de recomposición económica. Pronto se hablará de la *new economy*. Desde la década del 80 y durante la década de los 90, bajo la influencia de los discursos sobre el fin de la historia, las teorías que proclamaron el advenimiento de una sociedad posmoderna, produjeron una nueva utopía de la comunicación, la tecno- utopía: la de la “democracia en tiempo real” gracias a las “autopistas de la información” (Lévy, 1990, 1994 citado por Mattelart, 1997: 120) facilitadas por los nuevos desarrollos de tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, también hay quienes observan en estos desarrollos tecnológicos una amenaza: la posibilidad del control omnipresente. Así los desarrollos técnicos de la comunicación son considerados tanto condición de emancipación como de sujeción.

Los gobiernos de Estados Unidos –bajo la presidencia de Bill Clinton- y Europa – entonces Comunidad Económica Europea- impulsan el proyecto de la Sociedad de la Información. En 1994, en la conferencia plenaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en Buenos Aires, Al Gore, entonces vicepresidente de los EEUU, había anunciado el proyecto de “autopistas de la información”. Al año siguiente, la Cumbre del G7 en Bruselas convalida la *Global Information Society* sobre la base de la apertura, liberalización y libre actuación del sector privado. “Los términos de la cuestión del desequilibrio de los flujos de comunicación han cambiado tanto que algunos se permiten negar la

persistencia de un intercambio desigual”, sostiene Mattelart (1997: 115). En esos años, los debates sobre la regulación de los intercambios de información pasa a ser abordado por organismos “con vocación más técnica” como el GATT (Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio) que luego se convertiría en la OMC (Organización Mundial de Comercio), “donde el debate sobre los productos culturales quedó englobado en el del libre cambio de los servicios, en cuya ocasión la tesis neoliberal del *free flow of information* adquirió una nueva legitimidad” (Mattelart, 1997: 115). La OMC impulsa las políticas libremercadas dirigidas a concretar la desregulación del comercio audiovisual, la propiedad intelectual y las telecomunicaciones.

“El mercado planetario sin trabas pone en tensión la ‘libertad de expresión comercial’ y la libertad de expresión ciudadana. Las autoridades gubernamentales que, en los años setenta, reclamaban la creación de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación se han eclipsado, mientras que en los países más favorecidos de un Tercer Mundo, desde entonces desafiado, se ha afirmado un nuevo objetivo de desarrollo: arrimarse al primer mundo. ‘*Yankee go home!* Pero llévanos contigo’, reza el eslogan pintado en las paredes tanto de Puerto Príncipe como de Tijuana” (Mattelart, 1997: 116).

Un giro... ¿a la izquierda?

En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay triunfaron partidos o coaliciones políticas de centro-izquierda que, al menos en su retórica, se oponen a la ortodoxia neoliberal; en Venezuela y Bolivia los nuevos gobiernos formulan propuestas de transformación social más radicales; y la revolución cubana aparece como un referente importante ante los nuevos dirigentes políticos. En los análisis de estas experiencias, se comenzó a hablar de un “giro a la izquierda” de la política latinoamericana, y se procura distinguir entre una izquierda “populista” o “radical” y otra más conciliadora y “realista” que acepta la globalización neoliberal. Más allá de sus desiguales logros y de sus ambiguos compromisos con un proyecto transformador, este “giro a la izquierda” es la expresión de la generalizada insatisfacción ante el funcionamiento del modelo neoliberal que, aún en los casos y en los momentos en que obtuvo altas tasas de crecimiento económico no sólo demostró ser incapaz de redistribuir la riqueza sino que también profundizó la desigualdad y la pobreza. En este escenario, las alianzas “progresistas” procuran avanzar con reformas graduales y acumulativas que restrinjan el fundamentalismo del mercado.

“A tono con ciertas corrientes críticas de la globalización neoliberal, (...) mediante la combinación de productivismo y redistribución, la superación de la exclusión económico-social, la presencia de un estado fuerte y dotado de recursos y una radical democratización de la economía del mercado, el programa progresista buscaba erigirse en una alternativa viable al neoliberalismo y no en su mera humanización” (CLACSO, 2006).

En este marco, Borón sostiene que “las frágiles democracias latinoamericanas sólo podrán sobrevivir si tienen la audacia y la sabiduría suficientes como para promover un ambicioso programa de reformas sociales que modifiquen sustantivamente el funcionamiento del capitalismo periférico” (Borón, 2003). Para llevar adelante esta política reformista es prioritario reconstruir el Estado –por medio del fortalecimiento fiscal, la jerarquización del funcionariado, la lucha contra la corrupción, la reforma administrativa y burocrática, la redefinición de la estrategia de intervención económica y social, la transparencia y control ciudadano de decisiones-, realizar una reforma democrática que perfeccione la calidad de las instituciones y prácticas, emancipar a la política de los mercados, e implementar políticas orientadas a la provisión de bienes públicos no mercantilizados (Borón, 2000). Como resalta Borón, estas reformas son imprescindibles para consolidar las frágiles democracias de la región, evitar su formalismo institucional y dotarlas de contenido de justicia social.

“La democracia latinoamericana no sólo debe depositar en el pueblo la conformación de la autoridad pública y regirse por una legalidad constitucional: debe, además, impulsar un conjunto de políticas de reforma social sin las cuales las bases sociales que la sustentan tarde o temprano desertarán del campo democrático” (Borón, 2003).

En consonancia con los nuevos tiempos, los estudios de comunicación de la década del 2000, se verifica una renovada preocupación por el nexo entre comunicación y política –que se ocupa ahora de la relación entre comunicación y ciudadanía-, la continuación de las reflexiones sobre comunicación alternativa y hegemónica y comunicación para el desarrollo, y un renovado interés por los estudios de economía política de los medios. De este modo, ante la crisis del modelo neoliberal en los países latinoamericanos, los investigadores en comunicación retoman las discusiones económicas y políticas de los años 70.

“Con la entrada en el nuevo milenio, la legitimidad del discurso tecno- utópico se va a fisurar. El atentado a las Torres Gemelas en Nueva York es una desmentida al ‘todo tecnológico’, incapaz de anticipar el acto terrorista. La cara oculta de la ‘sociedad global de la información’ aparece: ‘la sociedad del control’. (...) La guerra de Irak fragmenta los mitos que están en la raíz de la llamada ‘revolución de la información’, otro de los *slogans* en vigor desde más de tres décadas. (...) el mito de un planeta dirigido por un recurso inmaterial único. (...) el mito del *softpower*, (...) el mito del ‘fin de las ideologías’ (...) En ese inventario de los factores que desinflaron el mito de la ‘revolución de la información’, agregaría un último: las desilusiones ocasionadas por la quiebra de la ‘nueva economía’ y las contradicciones de la construcción de la llamada ‘sociedad del conocimiento’” (Mattelart en Mata y otros, 2005: 30- 31).

Luego de la caída de los valores bursátiles tecnológicos y la quiebra de varias empresas de telecomunicaciones, la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de desarrollar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información –a iniciativa de la UIT- reactivó el debate. En esta Cumbre –que se desarrolló en dos fases, en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005- reapareció el debate multilateral sobre la información y la comunicación veinte años después del NOMIC. Esta reaparición conlleva muchos cambios. El debate se desplazó de un órgano dedicado a los problemas de la cultura como la UNESCO, a un órgano económico- técnico: la UIT que “es, hoy por hoy, la organización de Naciones Unidas más exitosamente semiprivatizada desde 1992. Siemens, Motorola, Bell, Nec, Alcatel, Ericsson y AT&T forman parte de su principal y cuasi deliberante órgano consultivo” (Pasquali, 2002 citado por Mastrini y de Charras, 2005). Se incorpora a organizaciones de la sociedad civil –donde se incluye a los académicos- como interlocutores de los gobiernos, además de las corporaciones privadas. Sin embargo, muchas de éstas últimas están doble o triplemente representadas por la eficacia de sus lobbies sobre los gobiernos y porque algunas cámaras empresarias de medios se incorporaron como parte de la sociedad civil. Los países periféricos ya no se presentan como bloque de los No Alineados, de modo que pierden peso. Aparecen nuevos ejes de debate ligados a los desarrollos tecnológicos como uso social de las tecnologías, el software libre y la propiedad intelectual. Como destacan Mastrini y de Charras, la declaración de la Cumbre no hizo referencia a la concentración de la propiedad de medios y su correlato nocivo en la pluralidad de voces para la democracia y el control del Estado, se refiere escuetamente a “los medios tradicionales”, obvia el rol de los medios comunitarios y pasa por alto el papel de los medios públicos. Asigna al Estado “sólo el lugar de ‘velar por la libre competencia’” y propiciar el “entorno habilitador” para el desarrollo del mercado (Mastrini y de Charras, 2005). Se hace hincapié en la necesidad de saldar la “brecha digital” cuando más que una brecha, es un desequilibrio, y se origina en la brecha socioeconómica. En tanto, no se habla de la brecha entre quienes poseen y acceden a los medios de comunicación y quienes no, desconociendo que “la información y la comunicación, aún en el siglo XXI no se reduce a internet” (Mastrini y de Charras, 2005).

Los movimientos sociales por la democratización de las comunicaciones surgen en este nuevo milenio de la mano de múltiples organizaciones sociales que reivindican la centralidad de la libertad de expresión, la pluralidad informativa, el acceso a la información pública y la diversidad cultural para asegurar la participación ciudadana y el Estado de Derecho, que consideran a la comunicación como un bien social que debe ser servicio público vinculado a la vigencia del sistema democrático y al desarrollo social, y que impulsan cambios en el sistema de medios. Estas organizaciones latinoamericanas y europeas desarrollan estrategias de acción en dos planos:

- En alianza con otras organizaciones que proponen la democratización de las relaciones sociales en diversos ámbitos, como fue la apertura en el Foro Social Mundial de 2003 y su continuidad desde entonces, de la mesa redonda Medios, Cultura y Contrahegemonía. En esta instancia, se lanzó en 2003, *Media Global Watch*, organización mundial de veeduría de medios con sede en Francia, a partir de la cual nacieron los observatorios de medios de Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina.
- Frente a los Estados, las organizaciones supranacionales y las empresas, como sucedió en las reuniones preparatorias para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y durante sus desarrollos en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005.

“Indudablemente, uno de los logros más importantes de la primera etapa de la Cumbre ha sido el papel que ha logrado jugar lo que se conoció como sociedad civil. En el etapa NOII/ NOMIC el movimiento de no alineados (...) jugó un rol primordial al momento de analizar críticamente el *status quo*, en la actualidad ese rol quedó prácticamente en manos de las OSC que han logrado ser escuchadas por los estados en muchos momentos, pero sobre todo han logrado un principio de articulación de sentidos comunes globales frente a la cuestión de los derechos humanos vinculados a la información y la comunicación (...), los medios comunitarios y públicos en oposición a la concentración mediática, el software libre (...) frente al software propietario, el dominio público frente a la propiedad intelectual, el respeto a la diversidad cultural y la participación más que el acceso, entre otros temas” (Mastrini y de Charras, 2005).

Conclusiones preliminares

Los debates en torno a la relación entre comunicación y política estuvieron siempre presentes en los desarrollos teóricos y en las prácticas de la comunicación en América Latina. Es más, Roncagliolo sostiene que el diseño de políticas nacionales de comunicación “constituyó casi la obsesión de los investigadores latinoamericanos” (Mastrini y de Charras, 2005). En la última década, estas discusiones, en gran parte, se dedican a explorar la relación entre comunicación y ciudadanía.

Las disputas en torno a la formulación de políticas de comunicación son inescindibles de los procesos políticos de la región. En estas disputas, se ponen en juego las visiones sobre la acción social –sobre los sujetos y las condiciones objetivas del cambio- y las perspectivas de cambio –la noción de desarrollo y democracia en juego- de cada perspectiva. De estas luchas participan fundamentalmente, gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones sociales, universidades y centros de investigación, y corporaciones empresarias.

Así, en la posguerra y durante la guerra fría, predominó en las prácticas y en la “importación” de las teorías difusionistas desarrolladas en los Estados Unidos, una perspectiva de la comunicación para el desarrollo, donde los medios de comunicación eran utilizados como instrumentos para generar un “clima favorable” a la difusión de las innovaciones tecnológicas y al cambio de conducta requerido para dejar atrás la sociedad tradicional y dar paso a la modernización, a tono con las teorías desarrollistas impulsadas en la región por la CEPAL y

financiadas por los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Holanda, y por la ONU y la OEA. El Departamento de Estado de los EEUU promueve el libre flujo de la información, a tono con el libre flujo de mercancías. El sujeto de las transformaciones serían los sectores medios y el desarrollo se pensaba a imagen y semejanza de los países centrales.

En la década de los 60, mientras se consolidaban los procesos de liberación e independencia de las antiguas colonias, investigadores latinoamericanos impugnan las premisas del desarrollismo y realizan aportes conocidos como teoría de la dependencia mientras que, en comunicación, cuestionan las teorías difusionistas, se avanza en estudios de economía de medios y se realizan aportes teóricos y prácticos de comunicación popular o alternativa. Los sujetos de la transformación eran los sectores populares –considerados esencialmente opositores al statu quo- quienes, a través de la “toma de conciencia” impulsarían procesos de desarrollo independiente. Por eso, se consideraba imprescindible disputar la propiedad de los medios y el emisor de los mensajes: las prácticas de comunicación alternativa son desarrolladas por campesinos, indígenas, mineros y otros obreros que se apropian de la tecnología de la radio para producir sus propios mensajes. Los años 70 continúa una gran productividad teórica y práctica en la región. El Movimiento de Países no Alineados asume la tensión Norte-Sur (aunque no deja de estar atravesada por la Este-Oeste) impulsa el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación reclamando no que el flujo de información no sólo sea libre, sino también equilibrado. Este debate se traslada a la UNESCO que produce el informe MacBride que es aprobado en 1980 por la Asamblea General de la ONU, a pesar de la férrea oposición de los países centrales.

En los 80, los procesos de transición democrática en Latinoamérica se desarrollan en el marco de la crisis de los Estados de Bienestar y la avanzada del neoliberalismo. Luego del fracaso de las políticas impulsadas por el Nomic y el informe MacBride, en el campo comunicacional se registra un repliegue tanto en la producción teórica como en la práctica. En las prácticas de comunicación para el desarrollo o comunicación alternativa que continúan, el sujeto popular comienza a ser comprendido como contradictorio y complejo, atravesado por lo urbano y lo masivo, y no necesariamente crítico ni opositor. Las teorías de la recepción desarrolladas desde diferentes perspectivas son aplicadas de modo populista para sustentar la autonomía y libertad del receptor para hacer uso de los mensajes de los medios a tono con la soberanía del consumidor para elegir productos en el mercado. En la década de 1990, el desarrollo tecnológico de las redes informáticas y la digitalización de la información, sumado a la consolidación de las políticas neoliberales, permiten expandir un imaginario tecno- utópico (iniciado en la década de 1970) que ve en la tecnología la salida a la crisis económica –se habla de la *new economy*- y para la democratización de la sociedad –“democracia en tiempo real”-. El debate multilateral sobre los flujos de información pasa ahora a un organismo técnico, el GATT, ahora OMC, que impulsa políticas de privatización y desregulación de las telecomunicaciones, desde una perspectiva de la comunicación como un servicio mercantilizado. El G7 impulsa la noción de “sociedad de la información”.

En el nuevo milenio, en Latinoamérica asumen gobiernos progresistas que, a pesar de sus diferencias, comparten –al menos en la retórica- los intentos de poner límites al fundamentalismo de mercado y de reconstruir el Estado. Luego de que en el 2000 los valores bursátiles de la tecnología caen estrepitosamente lo que lleva a la quiebra a muchas empresas del sector –con lo que se diluye la ilusión de que la tecnología salvaría a la economía-, y de que en 2001 los atentados a las torres gemelas y luego las guerras de Afganistán y de Irak pusieran en cuestión los mitos del *softpower* y de la democracia de las redes, la ONU reflota las teorías tecnófilas en el debate multilateral al convocar a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que se realizó en 2003 y 2005. En las declaraciones de esta cumbre, la comunicación aparece asimilada a la comunicación por la red –casi no se mencionan los “medios tradicionales”-, se la considera una mercancía –desconociendo el papel de los medios públicos y comunitarios, y dejando al Estado el rol de garante del “entorno facilitador” para el libre juego de mercado-, y los desequilibrios de propiedad, acceso y participación son reemplazados por la noción de “brecha digital” que desconoce su origen en una brecha –o, mejor dicho, en una asimetría- socioeconómica, e incluso desconoce la existencia de otras “brechas” comunicacionales.

Sin embargo, también las organizaciones sociales y los académicos han retomado el debate y la iniciativa para impulsar reformas del sistema comunicacional tendientes a promover la democratización y un modelo de desarrollo equitativo. “De la reivindicación por medios alternativos, comunitarios, independientes y libres, han pasado a pensar el sistema comunicativo a partir de la noción de ‘servicio público’” (Mattelart en Mata y otros, 2005: 37). La sociedad civil y la academia comenzaron a pensar también la articulación entre comunicación y ciudadanía. Ante la crisis de la clase trabajadora unificada y ante la necesidad de responder a demandas feministas, étnicas, religiosas, ecológicas, “la ciudadanía es el candidato obvio: nuestras posiciones pueden divergir de forma creciente, pero todos somos ciudadanos y, como tales, tenemos el derecho de recibir del Estado un ingreso mínimo, atención médica, etc. Más aún, es necesario apelar a la ciudadanía para unificar el conjunto de grupos sociales (...) Es necesario que existan algunos principios generales que puedan incorporar y armonizar las demandas de sus miembros” (Miller, 1997). Las disputas de las organizaciones sociales latinoamericanas que proponen democratizar las comunicaciones se dan en coincidencia –una vez más– con el renovado auge del debate acerca de la noción de ciudadanía en la Teoría Política y en el marco de procesos políticos que impulsan reformas progresistas en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELTRÁN SALMÓN, Luis Ramiro. 2005. *La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo*. III Congreso Panamericano de la Comunicación. Buenos Aires.

BORÓN, Atilio. 2000. *América Latina: crisis sin fin o fin de la crisis*. En López Segrera y Daniel Filmus (comp.) *América Latina 2020. Escenarios, alternativas, estrategias*. Buenos Aires: Unesco-Flacso-Temas Grupo Editorial.

BORÓN, Atilio. 2003. *Democracia y reforma social en América Latina: reflexiones a propósito de la experiencia europea*. En Borón, Atilio. *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del C.B.C.

CARDOSO, Fernando H. 1994. *¿Teoría de la dependencia o análisis concreto de situaciones de dependencia?* Revista Política y Sociedad, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 17. Madrid.

CLACSO. “Becas CLACSO-Asdi de promoción de la investigación social 2006-2008. *Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones del desarrollo en América Latina y el Caribe (2006)*. Antecedentes y objetivos del concurso”. Programa Regional de Becas. 2006. <http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa-regional-de-becas/Convocatorias/convocatoria.2006-06-07.4003380684>

COSTA, Ricardo. 1997. *Estrategias de intervención como teorías de la acción en acción*. Acto Social. Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales. V.17.

GARCÍA DELGADO, Daniel. 2001. *Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural*. Buenos Aires: FLACSO- Norma.

MASTRINI, Guillermo y DIEGO DE CHARRAS. 2005. *20 años no es nada: del NOMIC a la CMSI o el mismo amor, la misma lluvia*. Anuario Ininco. 17.1. pp. 217-240.

MATA, María Cristina; CÓRDOBA, Liliana y NICOLINO, Liliana (ed.). 2005. *Democracia y ciudadanía en la sociedad de la información: Desafíos y articulaciones regionales*. Córdoba: Escuela de Ciencias de la Información- Universidad Nacional de Córdoba, Delegación regional de cooperación para el Cono Sur y Brasil de la Embajada de Francia.

MATTELART, Armand y MATTELART, Michèle. 1997. *Historia de las teorías de la comunicación*. Barcelona: Paidós.

MILLER, David. 1997. *Ciudadanía y pluralismo*. Ágora. Cuadernos de Estudios Políticos. 7. Buenos Aires.

O'DONNELL, Guillermo. *Introducción a los casos latinoamericanos*". O'DONNELL, G., P.C. SCHMITTER y L. WHITEHEAD (comp.). 1988. *Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina. 2*. Buenos Aires: Paidós.

PREBISCH, Raúl. 1981. *Capitalismo periférico. Crisis y transformación*. México: Fondo de Cultura Económica.

PREBISCH, Raúl. 1982. *El retorno de la ortodoxia*. Pensamiento Iberoamericano. 1.1. pp. 73-78.

WEFFORT, Francisco. 1970. *Notas sobre la teoría de la dependencia: ¿teoría de clases o ideología nacional?* Documento de circulación interna de la Asociación de Becarios del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. México. pp. 3- 19.